TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CUNDINAMARCA
Sala Civil – Familia

Magistrado Sustanciador:
Germán Octavio Rodríguez Velásquez

Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiuno (2021).

Ref: Sucesión de Lina o Ana Delina Balsero Tauta. Exp. 25286-31-10-001-2007-00203-01.

Decídese el recurso de apelación interpuesto por el heredero Juan Pablo Calderón García contra el auto dictado el 1° de marzo pasado por el juzgado de familia de Funza dentro del presente asunto, por el cual denegó la solicitud de nulidad elevada por el recurrente, teniendo en cuenta los siguientes,

I. – Antecedentes

La mortuoria fue declarada abierta a pedido del heredero Efraín Calderón Balsero mediante auto de 3 de julio de 2007; en el trámite fueron reconocidos como herederos Juan Pablo Calderón García, Humberto y Jesús Reyes Mortigo Balsero y Graciela Balsero, sobrinos y sobrinos nietos de la causante, quienes aceptaron la herencia con beneficio de inventario.

Aprobados los inventarios y avalúos y habiéndose presentado el correspondiente trabajo de partición, por auto de 20 de febrero de 2015 se decretó la suspensión de la partición atendiendo la solicitud elevada por el heredero Juan Pablo Calderón García, aduciendo que él, junto con Lucas Alfonso, María Esperanza y Alejandro Calderón García, promovieron proceso de pertenencia sobre la parte del predio San Antonio respecto de la cual la causante ostentaba derechos y acciones.

Habiéndose aportado copia de la sentencia de 13 de diciembre de 2019 dictada por el juzgado civil del circuito de Funza en la que declaró la terminación anticipada del proceso por tratarse de un inmueble no prescriptible, dispuso el juzgado, por auto de 4 de noviembre de 2020, reanudar el proceso.

Mas, el heredero recurrente solicitó anular la actuación, alegando que se configuraron las causales de nulidad previstas en los numerales 1º, 3º y 4º del artículo 133 del código general del proceso, pues el registro civil de defunción del causante aportado a los autos, da cuenta de un número de cédula que realmente corresponde a Dora Quintero de Sánchez, cuyo domicilio fue Subachoque, por lo que el juez de Funza carece de competencia territorial, amén de que hay indebida representación, como que, en ese orden, quienes debieron concurrir a la mortuoria eran los herederos de aquélla y no de Lina o Ana Delina Balsero Tauta; además, la suspensión se decretó mientras se resolvía la pertenencia, lo que no ha sucedido, pues falta promover el trámite correspondiente ante la Agencia Nacional de Tierras.

La nulidad fue denegada por el juzgado, previo traslado, al estimar que las causales de nulidad son taxativas y por eso no pueden aplicarse a supuestos no previstos; la causal 1ª no se configura porque no ha declarado la falta de competencia; la del numeral 3º, dado que la suspensión decretada fue de la partición y no del proceso; y se reanudó porque la pertenencia ya terminó; y la del numeral 4º, en la medida en que las partes han estado debidamente representadas y, en todo caso, cualquier irregularidad que se haya presentado, quedó saneada.

Contra esta determinación interpuso el interesado en la nulidad los recursos de reposición y de apelación subsidiaria; y frustráneo como fue el primero, se concedió el segundo en el efecto devolutivo el que, debidamente aparejado, se apresta el Tribunal a desatar.

II. – El recurso de apelación

Lo despliega sobre la idea de que aun cuando las causales de nulidad son taxativas, deben analizarse en función de las circunstancias especiales de cada proceso, como acontece en el evento, donde las irregularidades puestas de presente en la petición anulatoria se encuentran configuradas; en efecto, si el juzgado civil del circuito de Funza consideró que el único bien de la sucesión se presume baldío, el juez de la sucesión pierde competencia para adjudicarlo, porque es de la Agencia Nacional de Tierras; la suspensión de la partición se dio justamente porque existía controversia sobre la posesión de ese bien herencial, y esa determinación que declaró terminado anticipadamente el proceso por la imprescriptibilidad del bien, no constituye una decisión de fondo, de suerte que el proceso debe seguir suspendido hasta que la autoridad competente resuelva; por lo demás, aunque las partes han estado debidamente representadas, no puede perderse de vista que el registro civil de defunción aportado no corresponde con el de la causante, como se establece de que el número de cédula que allí figura sea el de Dora Quintero de Sánchez, de donde eran los herederos de ésta quienes debieron comparecer a la sucesión y no los de Ana Delina Balsero Tauta.

Consideraciones

La cuestión es que si las nulidades son asunto de derecho estricto, como que dicha sanción sólo cabe en cuanto esté expresamente prevista por la ley, acaso por eso que la doctrina apellida como el principio de la taxatividad, difícilmente puede apelarse a un expediente como el propuesto por el recurrente para dar al traste con una actuación que viene adelantándose hace más de catorce años.

En efecto, sobre el punto ha subrayado la jurisprudencia que *“la fijación del régimen de las nulidades es asunto que, en línea de principio, es del resorte del legislador, que indica, según los criterios antes señalados,*

las causales que las generan, tal como quedó consignado en el citado artículo 140 [ahora precepto 133 del código general del proceso], atendiendo, claro está, los principios y garantías constitucionales, de los que son finalmente una nítida expresión” (Cas. Civ. Sent. de 19 de diciembre de 2005, exp. 7864 y 24 de octubre de 2006, exp. 00058, reiterado en auto de 9 de diciembre de 2008, exp. 2002-00003), de suerte que por más sui-generis que a juicio de la apelación sean esas singularidades que se han presentado en el proceso, la obligación del juzgador siempre será analizar en qué medida esos hechos alegados encuadran dentro de la hipótesis abstracta que de acuerdo con el legislador configura las causales de nulidad invocadas; y aquí, lo que se evidencia, es que esos hechos en que viene apoyada la petición la nulidad, no caen, ni como mucho, dentro de esas descripciones hipotética que establece la ley.

Así, atinente a la causal 1ª de nulidad, es de verse que ésta se configura “[c]uando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia”, lo que significa que dentro de su libertad de configuración el legislador ya no sanciona con nulidad las actuaciones que adelanta el juez que carece de competencia, antes de que se dicte sentencia, salvo que previamente haya declarado su incompetencia para conocer de ese asunto; algo que no parece ser fortuito, sino precisamente porque aquél “*tomó en consideración, según las circunstancias, que la determinación del juez competente en los asuntos regidos por el CGP es compleja y la instrucción del asunto, por parte del juez incompetente, no resulta de una intención de disminuir garantías procesales, ni tiene este efecto, lo que sería reprochable*”, al punto que, díjose por la jurisprudencia al analizar la compatibilidad de esa norma que sanciona con nulidad solo la falta de competencia por los factores subjetivo y funcional, la “*conservación de validez de la actuación procesal, antes de la declaratoria de incompetencia, es una medida válida que pretende la eficacia del derecho de acceso a la justicia, con la obtención de una decisión en términos razonables, con respeto del principio constitucional de celeridad de la administración de justicia, economía procesal, la tutela*

judicial efectiva y la prevalencia del derecho sustancial, sobre el adjetivo, ya que evitará repetir, sin razón de garantías, lo actuado en debida forma por el juez ahora declarado incompetente y excluye la declaratoria de nulidad, por esta causal, como un mecanismo de dilación del proceso. Así, la norma también es una medida razonable para evitar la congestión de la justicia. En otras palabras, lo que se busca con esta medida es evitar el desgaste innecesario de la administración de justicia, en detrimento de los justiciables, para que, a pesar de haber instruido adecuadamente un proceso, no deba rehacerlo cuando, a parte del factor de competencia, las actuaciones realizadas fueron desarrolladas adecuadamente” (Sentencia C-537 de 2016), algo demostrativo de que existiendo, dos posibilidades de cara a la existencia del proceso, la que debe primar tiene que ser, sin atisbos de duda, la de su conservación.

Más aún, aunque la apelación las emprende contra la competencia del juzgado que tramita la mortuoria, no ve que eso que esgrime como base de su alegato, es decir, que quien debe definir esos inconvenientes que se presentan con el único bien sucesoral es la Agencia Nacional de Tierras y no el juez de la sucesión, no influye de ninguna manera en la competencia que tiene este último; y, claro, el planteamiento parecería inobjetable si se tiene en cuenta que a voces del artículo 65 de la ley 160 de 1994, la *“propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, sólo puede adquirirse mediante título traslativo de dominio otorgado por el Estado a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, o por las entidades públicas en las que delegue esta facultad”*, competencia que de acuerdo con el decreto 2363 de 2015 se encuentra asignada a la sobredicha agencia estatal. Mas, el objetivo del proceso de sucesión no es sustituir esa competencia adjudicando propiedad. No, pues lo inventariado como activo sucesoral fueron los derechos y acciones que la causante tenía sobre el bien, de donde lo que debe definirse en esta fase por la que atraviesa la mortuoria es la proporción que a cada uno de los herederos le corresponde en función de su derecho hereditario, después de lo cual, si el rumbo de las cosas

siguen ese derrotero que plantea el recurrente, acudir a las acciones previstas por el legislador en procura de consolidar la propiedad, situación que de suyo descarta esa falta de competencia que la petición le endilga al juzgado.

Como tampoco hay nulidad por la circunstancia prevista en el numeral 3° del artículo 133 del estatuto citado, en cuanto prevé como causal de ineficacia el hecho de adelantar un proceso “*después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida*”, pues aunque diga la apelación que estando suspendida la partición, no podía proseguirse con ese trámite, dado que esa terminación anticipada en que dio el juzgado que tramitaba la pertenencia no definió de fondo la controversia que a la final dio lugar a la suspensión, es clarísimo que ese debate debió agitarlo justamente allí, recurriendo esa determinación, pues con su silencio anduvo subsanando cualquier irregularidad, si así pudiera calificarse, anidada en el auto que la dispuso.

Y si esto no bastara, nótese de todos modos que la partición según la regla del citado artículo 516 del código general del proceso, que a su turno remite a los artículos 1387 y 1388 del código civil, es susceptible de suspenderse mientras por la justicia ordinaria se deciden las controversias que toquen con la propiedad de los bienes a distribuir y con los derechos de quienes aspiren a ser adjudicatarios de ésta y para ello debe acompañarse certificado sobre la existencia del proceso, así como copia de la demanda, del auto admisorio y de su notificación; mas, el legislador no prevé que ella deba mantenerse hasta que mediante sentencia ejecutoriada se defina alguna de esas circunstancias que dio pábulo a la suspensión, pues complementa el citado precepto, “[a]creditada la terminación de los respectivos procesos se reanudará el de sucesión, en el que se tendrá en cuenta lo que se hubiere resuelto en aquellos. El asignatario cuyas pretensiones hubieren sido acogidas, podrá solicitar que se rehagan los inventarios y avalúos”.

Lo que deja a descubierto que la reanudación del trámite únicamente está sujeta a la terminación del proceso por cuyo trámite se suspendió la partición, con independencia de si aquella se dio mediante sentencia o por alguna de las denominadas formas de terminación ‘anormal’ del trámite.

Relativamente a la causal 4^a de nulidad, que se configura cuando “*es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder*”, esto es, en los casos en que “*interviene un incapaz, una persona jurídica, un patrimonio autónomo o cualquier otro sujeto que deba concurrir al proceso por intermedio de un representante legal o vocero, sin la presencia de éste. Igual consecuencia se originará del hecho de permitir la participación de un abogado, en nombre de uno de los sujetos procesales, sin encargo para actuar*” (Cas. Civ. Sent. de 20 de febrero de 2018, exp. SC280-2018) y “*no puede ser invocada eficazmente sino por la parte mal representada, notificada o emplazada, por ser ella en quien exclusivamente radica el interés indispensable para alegar dichos vicios*’ (G. J., t. CCXXXIV, pag.180)” (Cas. Civ. Sent. de 12 de abril de 2004; exp. 7077), como lo establece el inciso 3° del precepto 135 del citado ordenamiento, a cuyo tenor se tiene que la ineficacia del proceso cuando de “*indebida representación*” se trata, “*solo podrá ser alegada por la persona afectada*”. Lo cual indica de modo concluyente que el peticionario no está habilitado para controvertir las actuaciones que guardan relación con la representación de otros supuestos herederos, pues carece de interés para ello.

A lo que debe añadirse, ya para terminar, que sin desconocer que la “*cédula de ciudadanía representa en nuestra organización jurídica, un instrumento de vastos alcances en el orden social, en la medida en la que se considera idónea para identificar cabalmente a las personas, acreditar la ciudadanía y viabilizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos. No cabe duda que la cédula de ciudadanía constituye un documento al que se le atribuyen alcances y virtualidades de diferente orden que*

trascienden, según la Constitución y la ley, la vida personal de los individuos para incidir de modo especial en el propio acontecer de la organización y funcionamiento de la sociedad” (Sentencia C-511 de 1999), no debe perderse de vista que el “estado civil de una persona es su ‘situación jurídica en la familia y la sociedad’, que le brinda ciertas prerrogativas en punto del ejercicio de algunos de sus derechos o en la adquisición de unas específicas obligaciones, en relación con el cual cabe apuntar, adicionalmente, que está caracterizado por ser ‘indivisible, indisponible e imprescriptible’, que su ‘asignación corresponde a la ley’ (art. 1º, Decreto 1260 de 1970) y que se ‘deriva de los hechos, actos y providencias que lo determinan’, según la calificación que de ellos igualmente contiene el ordenamiento jurídico (art. 2º, ib.). El estado civil, pues, surge una vez se realicen los hechos constitutivos del mismo, como nacer de padres casados o compañeros permanentes, o inmediatamente ocurra el acto que lo constituye como celebrar matrimonio, o, en fin cuando queda en firme la sentencia que los determina, como en el caso de la declaración de paternidad natural. Un determinado estado civil se tiene, entonces, por la ocurrencia de los hechos o actos que lo constituyen o por el proferimiento de la respectiva providencia judicial que lo declara o decreta” (Cas. Civ. Sent. de 6 de octubre de 2015, exp. SC13602-2015).

Y aquí sobran razones de sobra para colegir que la sucesión que se está liquidando es la de Lina o Ana Delina Balsero Tauta, quien falleció el 27 de septiembre de 1995, con todo y que el número de cédula de ciudadanía inscrito en el registro civil, no se corresponda verdaderamente con el suyo; conclusión a la que se arriba no solo del hecho de que quienes han intervenido en la mortuoria han acreditado su derecho a heredar a la citada causante mediante esas partidas de bautismo y de nacimiento que obran en los autos, incluido el recurrente, sino además porque de acuerdo con lo certificado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, se tiene certeza de que ese registro civil de defunción no pertenece a Dora Quintero de Sánchez, pues ésta falleció en septiembre de

2007, cuando este trámite ya estaba en curso y el serial de su registro civil de defunción (5344443) dista mucho del que obra en los autos (5362482) que fue el que reemplazó los seriales 464347 y 04326411, por orden emanada del juzgado promiscuo de familia de Funza mediante sentencia 0549 de 2006), motivo suficiente para no predicar la existencia de alguna irregularidad capaz de avasallar con la legalidad de un trámite que viene ventilándose hace casi tres lustros.

Como colofón, el auto apelado debe confirmarse; las costas, ya para terminar, se impondrán con sujeción a la regla 1ª del precepto 365 del estatuto procesal vigente.

III. – Decisión

En merito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil – Familia, confirma el proveído de fecha y procedencia preanotados.

Costas del recurso a cargo del recurrente. Liquídense por la secretaría del a-quo incluyendo la suma de \$350.000 como agencias en derecho.

Oportunamente, vuelva el proceso al juzgado de origen para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase,

Germán Octavio Rodríguez Velásquez

Firmado Por:

**GERMAN OCTAVIO RODRIGUEZ VELASQUEZ
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO
SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 004 CIVIL - FAMILIA
DE CUNDINAMARCA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**8acc40281fc8ac2e8a3c56776fb7e7ddd1840f41062065343a
23b1e031e8f780**

Documento generado en 04/06/2021 12:14:11 PM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**